

El Asesinato del general Torres:

Exterminio por cuenta ajena

El ex presidente boliviano general Juan José Torres ha sido asesinado en la Argentina. Es el momento de recordar los antecedentes inmediatos de este nuevo crimen político, de señalar las responsabilidades y de vigorizar una campaña mundial en defensa de los refugiados políticos latinoamericanos. Es el momento, en fin, de pasar de las lágrimas a la acción democrática universal que detenga el exterminio de una vanguardia revolucionaria.

Comencemos por los antecedentes de esta práctica internacional de la represión por encargo, destacando aquellos que atañen a Bolivia. Derrocado Salvador Allende, la dictadura de Pinochet apresó, torturó y asesinó a millares de refugiados políticos latinoamericanos. Ahí está el nombre, entre otros, del boliviano Ríos Dalenz, cuyas cenizas volvieron a su país subrepticamente, dentro de un tarro de leche en polvo, única manera de burlar la prohibición de su retorno, aunque fuera muerto. Centenares de bolivianos fueron apresados y enviados a su país en vagones destinados al transporte de ganado, en una entrega masiva de víctimas que imita ese viaje final desde los "ghettos" hasta los hornos crematorios, organizado por los antecesores históricos de esta excrecencia fascistoide que aplasta a los pueblos del extremo sur del continente. Por supuesto que el gobierno de Bánzer retribuía los favores de Pinochet: aviones militares bolivianos transportaban a Chile plasma sanguíneo extraído por la fuerza a conscriptos campesinos, mientras los representantes de unas cuantas familias de la burguesía boliviana radicada en Santiago hacían donación de joyas y dinero para "contribuir a la reconstrucción económica de Chile". Unos meses después, cuando la condena mundial forzó la sustitución de los groseros métodos empleados por otros de mayor sofisticación, Pinochet optó por satisfacer los requerimientos de su colega Bánzer secuestrando a bolivianos y remitiéndolos en aviones militares hasta la capital boliviana. Es el caso de dos ex ministros, de Trabajo y del Interior, el último de los cuales formó parte, precisamente, del gobierno del Ge-

neral Torres. Otras veces, los pedidos se referían al propio General Torres: dos bombas estallaron en su domicilio privado en Santiago.

Lo ocurrido después muestra el perfeccionamiento de un sistema de exterminio político internacional basado en el intercambio de favores represivos por las dictaduras de Geisel, Bánzer, Bordaberry y Pinochet, a las que se sumaron los gobiernos encabezados por la viuda de Perón y su reemplazante el General Videla. Hay que recordar, también, la manera cómo los gobiernos chileno y argentino dieron solución simultánea a los problemas represivos que confrontaban, mediante un intercambio de nombres por cadáveres. Pinochet necesitaba muertos en otro país a los cuales atribuir la identidad personal de los chilenos asesinados en prisión; y el gobierno argentino requería nombres de extranjeros para bautizar a los argentinos que mataba. Tampoco es posible olvidar el asesinato del General chileno Carlos Prats, ni la desaparición de refugiados uruguayos en Argentina que aparecen asesinados en las calles de Montevideo, ni el asesinato por encargo de los ex parlamentarios Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Esos son los antecedentes. Fijemos las responsabilidades por el asesinato del ex presidente boliviano general Juan José Torres: la del gobierno argentino, en primer término, no sólo porque incumple su obligación moral y jurídica de garantizar la seguridad y la vida de los refugiados políticos en su territorio, o porque su manifiesta renuencia a investigar oportunamente la desaparición de asilados latinoamericanos le hace cómplice de los secuestros, sino por su directa relación con las bandas parapoliciales que heredó del gobierno depuesto y a las que nutre, cuando menos, brindándoles el margen de increíble impunidad de que los asesinos disponen para la consumación de la matanza. Pero en el banquillo del acusado también está la dictadura boliviana encabezada por Bánzer. Y su responsabilidad en la muerte de estudiantes y trabajadores bolivianos en Argentina, así como la que le corresponde por el

asesinato del general Torres, no es secundaria. No lo es porque ella no se reduce al exilio de las víctimas ni a su negativa a la repatriación de aquellos dispuestos al retorno, ni a su prohibición de extenderles algún documento de identidad de validez internacional que los libere de la condición de apátridas a que se les ha condenado y les permita abandonar el país donde encontraron la muerte. No, su responsabilidad es mucho mayor; es la que corresponde a un régimen orgánicamente insertado en un sistema represivo regional, ciegamente determinado al exterminio de la vanguardia revolucionaria latinoamericana, mediante un intercambio de favores policiacos entre regímenes ideológicamente afines.

Frente a este designio, frente a la cotidiana matanza de obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, a los que la represión ha concentrado en países donde creyeron alcanzar un refugio y encontraron un cadáver, urge una vigorosa acción democrática mundial que detenga la mano homicida. Para ello, no es suficiente el pronunciamiento o la palabra condenatoria de instituciones o personalidades democráticas, sino la toma de conciencia sobre la causa final de esta demencial política de exterminio y la unidad combativa de los pueblos oprimidos. La militarización del poder en América del Sur, la conversión de sus Fuerzas Armadas en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios países, expresa que el crecimiento de las fuerzas populares democráticas y nacionales ha tornado incompatibles el régimen de libertades y la preservación de un orden oligárquico proimperialista.